

COMENTARIO GENERAL

Situación política

En la reanudación de los trabajos parlamentarios al regreso de las vacaciones de verano, los distintos partidos tenían muy bien definidas sus prioridades legislativas. Los senadores y los diputados de la Unión Social Liberal, en el gobierno, tienen como prioridades para esta sesión ordinaria adoptar la nueva Constitución y crear la ley del referéndum, pero también desean finalizar el proceso de regionalización y descentralización. Según el Primer Ministro Victor Ponta, líder del Partido Social Demócrata, de este modo en el presupuesto para 2014 podrán concederse más fondos a las comunidades locales, incluso antes de crear las regiones como unidades administrativas.

Los liberales, socios en el gobierno, apoyan las iniciativas de índole económica. Entre dichas iniciativas figura la disminución de las contribuciones a los seguros sociales. El presidente del Partido Nacional Liberal, jefe del Senado, Crin Antonescu, está a favor de «un diálogo más consistente entre el Gobierno y su propia mayoría, la limitación de las iniciativas legislativas de urgencia a los casos verdaderamente urgentes y un diálogo más atento a nivel parlamentario».

La principal formación en la oposición, el Partido Demócrata Liberal, ha presentado ya ante el Parlamento un proyecto por el que solicita la creación de la Autoridad para la Protección de los Inversores que, entre otras, se propone también reducir la fiscalidad. Entre las medidas propuestas figura también la reducción del tipo único del impuesto sobre la renta al 12%, que los beneficios reinvertidos estén exentos de impuestos y que el sueldo mínimo sea de casi 225 euros. El presidente del Partido Demócrata Liberal, Vasile Blaga, afirma que se ha visto que «el poder no estaba de acuerdo, pero como consecuencia de las conversaciones celebradas dentro de la Unión Social Liberal, ya estamos hablando de la reducción en un 3% de los seguros sociales pagados por los contratistas a partir del próximo 1 de enero».

El presupuesto estatal para 2014 y la descentralización son los objetivos de la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, que opta por una versión con 16 regiones de desarrollo regional. Conservar la ley de educación en una forma que no afecte a la enseñanza en idioma materno es otra de las prioridades de la minoría húngara de Rumanía.

El Parlamento ha empezado a debatir sobre dos temas con mucho impacto sobre la opinión pública de Rumanía, el proyecto de Roşia Montană y el problema de los perros callejeros. Según el ministro del Ambiente, Rovana Plumb, este debate pondrá fin a la responsabilidad que los mandatarios han aplazado continuamente.

La garantía de inversiones en medio ambiente, que ha subido de 76 millones de dólares a 146 millones de dólares, cubrirá completamente el cierre de la mina y de las instalaciones de desechos en condiciones de seguridad, añade Rovana Plumb.

Los ecologistas afirman que la extracción con cianuro implica grandes riesgos de contaminación irreversible para el ambiente y la destrucción de varios vestigios históricos. Sus argumentos han hecho que miles de opositores salgan a la calle, tanto en Bucarest como en varias ciudades de Rumanía y del extranjero. En Roşia Montană, los alcaldes de más de 40 localidades han movilizado a la población y solicitan a los

diputados y senadores que voten a favor de reanudar las actividades mineras en³³ una zona gravemente afectada por el desempleo.

La ley sobre los perros callejeros está también en la agenda del Parlamento de Bucarest. El asunto divide la sociedad rumana entre opositores y partidarios de la eutanasia como solución. Ahora, la muerte violenta de un niño de cuatro años desgarrado por los perros cerca de un parque de Bucarest ha movilizó a las autoridades, que han solicitado que el legislativo tome una decisión. Además, el próximo 6 de octubre se organizará un referéndum en Bucarest, donde hay casi 65.000 perros callejeros.

Otro asunto que sigue en las primeras planas es el de la adhesión de Rumanía al espacio Schengen. El Premier Ponta ha subrayado que el Gobierno de Bucarest espera una respuesta positiva respecto al ingreso en el espacio de libre circulación, que podría ocurrir en la reunión de los ministros comunitarios del Interior y Justicia, que tendrá lugar en diciembre. Ponta ha mencionado que la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen se hará probablemente en dos etapas, comenzando con las fronteras aéreas. Asimismo, el jefe del Ejecutivo de Bucarest ha vuelto a mencionar que las posiciones expresadas sobre la adhesión de Rumanía tienen también una fuerte base política, según las evoluciones internas de varios países miembros.

Esta idea ha destacado también en la reacción que la diplomacia rumana ha tenido recientemente ante las reservas del ministro francés del Interior, Manuel Valls, respecto a la adhesión del país el 1 de enero de 2014.

El problema de los gitanos preocupa a Francia, y no es la primera vez. Según las estimaciones, en el territorio francés viven aproximadamente 20.000 gitanos rumanos, muchas veces acusados de robo, de mendicidad agresiva y de atracos. En otras palabras, y lo dice el propio ministro Manuel Valls, los gitanos no quieren integrarse. Esta es la razón principal, aunque no directamente declarada, por la cual numerosos políticos, tanto de la oposición como del poder, piden aplazar la incorporación de Rumanía al espacio de Schengen, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2014.

Por su parte, Ponta ha asegurado que el Gobierno de Bucarest continuará su estrategia de integración de los gitanos en cooperación con los mandatarios de la Comisión Europea, dado que se trata de una responsabilidad ante toda Europa y no solo ante Francia. Aun en estas condiciones, la polémica suscitada en Francia y alimentada por argumentos electorales parece estar lejos de solucionarse. Así, el camino de Rumanía hacia el espacio de Schengen solo sería posible con el acuerdo de todos los países miembros de este espacio de libre circulación.

Situación económica

El Primer Ministro presentó ante el Parlamento de Bucarest, los principales elementos del nuevo acuerdo con la Comisión Europea, el FMI y el Banco Mundial. Ponta ha precisado que el documento no supone ninguna obligación o intención de aumentar la fiscalidad. Ha solicitado el apoyo de los diputados y senadores para que el Ejecutivo firme este documento y el Estado rumano pueda seguir tomando préstamos a menores intereses de los mercados financieros internacionales. Se trata de un acuerdo preventivo con las instituciones internacionales y tiene un valor de 4.000 millones de euros. Según el primer ministro rumano, el acuerdo tiene por objetivo ofrecer apoyo en caso de una nueva crisis en la zona euro o a nivel mundial, estimular la reforma y contribuir a la estabilización económica del Estado.

Para que Rumanía consiga obtener el préstamo, los acreedores han solicitado³⁴ reformas en el sector sanitario, pero también soluciones al problema de los programas de privatización de las compañías públicas. Los representantes de la USL, en el poder, han precisado que no se trata únicamente de un préstamo, sino que también confirma los progresos de Rumanía. Inclusive el FMI pronostica que el PIB de Rumanía aumentará un 2% en 2013 y un 2,25% en 2014. Este proyecto tiene también el apoyo de los parlamentarios de la UDMR, en la oposición, quienes afirman que este préstamo preventivo es necesario y beneficioso para la economía rumana, porque asegura mucha credibilidad sin representar un cargo suplementario para los ciudadanos.

Sin embargo, la principal formación de oposición, el PDL, considera que Rumanía tendría que pasar a un acuerdo de desarrollo, que pueda relanzar la economía y crear nuevos empleos. El representante de los liberales demócratas, el ex ministro de Hacienda Gheorghe Ialomițeanu, afirma que, de esta forma, el Gobierno ha hecho únicamente un ejercicio de imagen y ha mostrado su falta de responsabilidad frente a la población. El acuerdo se desarrollará durante dos años. La carta de intenciones fue enviada al FMI el 12 de septiembre y se debatirá este otoño.

Los senadores y diputados rumanos aprobaron la creación de una comisión especial para el proyecto de la explotación aurífera de Roșia Montană. El próximo 21 de octubre, el documento será debatido por el Senado.

Situada en el centro de Transilvania, región famosa por sus riquezas subterráneas, Roșia Montană, este pequeño pueblo que cuenta con una mina de oro, tiene una larga historia. Hace dos mil años, los romanos fueron los primeros en explotar el oro de Roșia Montană construyendo un laberinto de galerías para extraer el valioso metal. Estos pozos romanos pueden visitarse hoy día.

El depósito de oro de 300 toneladas debajo de Roșia Montană es considerado actualmente uno de los más grandes de Europa y el tercero más grande del mundo. Su valor es aún más grande porque además del oro, los especialistas estiman la existencia de algunas cantidades significativas de metales raros con aplicaciones tecnológicas. A estas cantidades se les añaden 1.600 toneladas de plata.

Bloqueada por muchos años a causa de las polémicas sobre la protección del medio ambiente, la inversión de Roșia Montană fue incluida en el Plan nacional de inversiones y puestos de trabajo recientemente lanzado por el Gobierno de Bucarest y presentado como proyecto de explotación con nuevos estándares medioambientales del cual el estado estima beneficios de un 78% de lo que genera el proyecto.

A finales del mes pasado, el Ejecutivo decidió aprobar un proyecto de ley que reglamenta la explotación de los minerales auríferos de Roșia Montană por una empresa canadiense. El documento había sido transmitido al Parlamento para su adopción pero esta decisión generó una serie de protestas por parte de los que se oponen al proyecto minero de Roșia Montană en Bucarest, en varias ciudades del país, así como en el extranjero. Los opositores del proyecto cuentan con el respaldo de varios ecologistas e historiadores, que advierten que la extracción con cianuro implica riesgos mayores de contaminación irreversible del medio ambiente y que la explotación minera destruiría vestigios históricos. En cambio, los partidarios del proyecto, especialmente habitantes de dicha zona, afirman que la apertura de la mina crearía empleos y resolvería los problemas económicos y sociales de la zona. Aparentemente intimidado por estos descontentos, el primer ministro Victor Ponta dejó de intervenir en este proyecto y anunció la creación de una comisión especial en el Parlamento que analizará el plan minero de Roșia Montană. El pasado martes, las

direcciones de las dos Cámaras decidieron la constitución de la Comisión que³⁵ examinará a todos los actores implicados y posteriormente realizará un informe que llegará a las dos Cámaras. Alrededor del 1 de noviembre de 2013, la Cámara de los Diputados, foro de decisión en este caso, votará a favor o en contra del proyecto de ley.

En Bucarest, desde hace ya cuatro semanas, se desarrollan manifestaciones contra la explotación minera con cianuro de Roşia Montană. El pasado sábado, 6.000 jóvenes rodearon el edificio del Parlamento y el pasado domingo 15.000 personas salieron a las calles de la capital. Manifestaciones similares, pero no del mismo tamaño, se organizaron también en otras ciudades de Rumanía y en el extranjero. Las protestas se iniciaron el pasado 1 de septiembre, tras la decisión del Gobierno de enviar al Parlamento un proyecto de ley que permite la explotación aurífera en los Montes Apuseni.

Según los representantes del inversor canadiense, la empresa Roşia Montană Gold Corporation, la inversión crearía más de 2.000 empleos. La directora de proyectos técnicos de esta empresa, Cecilia Szentesi, declara que, tras esta explotación, Rumanía estaría en el primer lugar en Europa en este sector, porque la cantidad de oro extraída será de aproximadamente 16 toneladas al año.

Los mineros de la zona sostienen también este proyecto y han organizado manifestaciones para solicitar que se inicie la actividad de explotación.

Dentro de la USL, que tiene una mayoría del 70%, las opiniones están divididas: los socialdemócratas sostienen el proyecto minero, mientras que los liberales están contra.

Situación social

La liberalización del mercado laboral europeo

El documento de 2007, cuando Rumanía y Bulgaria ingresaron en la UE, permitió a los Estados miembros aplicar normas transitorias respecto al acceso de los rumanos y búlgaros al mercado laboral por un período de como máximo siete años. Según estas normas, nueve estados miembros mantienen todavía restricciones que se levantarán el 1 de enero del 2014, cuando el mercado laboral europeo se abrirá completamente. Mientras que los gobiernos de Sofía y Bucarest consideran estas medidas como normales para todos los Estados miembros, hay todavía temores en cuanto a una masiva migración desde el este de Europa. Junto al Reino Unido, los Países Bajos son uno de los países donde hay voces que solicitan al gobierno que aplaque la liberalización del mercado laboral para los rumanos y búlgaros.

La ministra rumana de Trabajo, Mariana Câmpeanu, se ha reunido este lunes en la Haya con su homólogo holandés, Lodewijk Asscher, para debatir este asunto. Al final de la reunión, ambos mandatarios han declarado que Rumanía y los Países Bajos encontrarán soluciones comunes para asegurarse de que la decisión de abrir el mercado laboral para los rumanos y búlgaros no creará problemas. En los Países Bajos, numerosos mandatarios afirman que los rumanos y búlgaros serán bienvenidos a partir del 1 de enero, pero existe también el temor de que los holandeses pierdan sus trabajos tras su llegada. Según declaraciones de Mariana Câmpeanu, «Los holandeses piensan probablemente que los rumanos podrían aceptar sueldos más bajos y así se podían quedar sin trabajo, pero el problema no es este. El problema es por qué hay empresas que infringen la legislación. En esto se tiene que trabajar, porque en vez de un rumano o un búlgaro puede venir un croata, un francés o un

alemán. Si quieren defender sus trabajos, deben entender que cualquier persona³⁶ que trabaja, por ejemplo, en los Países Bajos debe tener los mismos derechos».

Ambos ministros de Trabajo han declarado que en Bucarest y la Haya las medidas de protección de los derechos laborales tienen que luchar contra abusos como la explotación de los empleados, los sueldos inferiores al salario mínimo o las jornadas extensas. En última instancia, al respetar las leyes internas, los Países Bajos se comprometen a respetar también los Tratados internacionales firmados, inclusive el Tratado Europeo, en el que se menciona la libre circulación de la mano de obra.